

Decisión:

El Tribunal, por unanimidad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta en la **ADI 4.245** y, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta en la **ADI 7.686**, para:

a) Otorgar una interpretación conforme al **artículo 13(1)(b) del Convenio de La Haya de 1980**, reconociendo que la excepción al retorno inmediato del niño por existir un grave riesgo para su integridad física o psíquica, o por encontrarse en una situación intolerable, es aplicable en los casos de **violencia doméstica**, aun cuando el niño no sea la víctima directa, siempre que existan indicios objetivos y concretos de la situación de riesgo, de conformidad con el principio del interés superior del niño (art. 227 de la Constitución Federal de 1988) y con una perspectiva de género (arts. 1, inciso III, y 226, § 8, de la Constitución Federal de 1988).

b) Ordenar al **Consejo Nacional de Justicia (CNJ)** la constitución de un grupo de trabajo interinstitucional para elaborar, en el plazo de sesenta (60) días, un proyecto de resolución destinado a garantizar una mayor celeridad y eficiencia en la tramitación de los procedimientos de restitución internacional de niños, asegurando, con pleno respeto al contradictorio y al derecho de defensa, que la decisión definitiva sobre el retorno del niño sea dictada en un plazo no superior a un (1) año.

c) Disponer que dicha resolución, que adecuará la Resolución CNJ n.º 449/2022 a los términos de esta decisión, establezca la obligación de la parte demandada de informar la existencia de cualquier proceso de custodia pendiente en el territorio nacional y atribuya al **Foro Nacional de la Infancia y la Juventud (Foninj)** del CNJ la gestión de la tramitación de esos procesos en Brasil. Los principios del contradictorio y del derecho de defensa serán aplicables tanto a los supuestos del artículo 1 como del artículo 12 del Convenio. Asimismo, los hechos públicos y notorios y las reglas de la experiencia (arts. 374 y 375 del Código de Proceso Civil) podrán servir como elementos de convicción.

d) Ordenar a los **Tribunales Regionales Federales** dictar normas internas destinadas a concentrar la competencia para conocer y decidir los procesos relativos al Convenio de La Haya de 1980, en materia de restitución internacional de niños, en uno o más juzgados y salas de apelación de las capitales de los Estados, de conformidad con el artículo 96, inciso I, letra "d", de la Constitución Federal de 1988, con el fin de promover la uniformidad y la celeridad procesal.

e) Disponer la creación, en el ámbito de los Tribunales Regionales Federales, de núcleos especializados de apoyo destinados a fomentar la conciliación, la adopción de prácticas restaurativas, la coordinación y supervisión de las pericias psicosociales y el apoyo técnico y metodológico a los magistrados.

f) Ordenar a los órganos del Poder Judicial, con el apoyo del CNJ, adecuar los sistemas electrónicos de gestión judicial para incorporar etiquetas de tramitación preferente a todos los procesos identificados con el código de asunto "**10921 – Restitución de Niño, Convenio de La Haya de 1980**", conforme al artículo 27 de la Resolución CNJ n.º 449/2022.

g) Ordenar al Poder Ejecutivo adoptar medidas estructurales y administrativas destinadas a fortalecer la actuación de la **Autoridad Central Administrativa Federal (ACAF)**, estableciendo objetivos, cronogramas e indicadores de desempeño.

h) Ordenar al Poder Ejecutivo evaluar la conveniencia de la adhesión de Brasil al **Convenio de La Haya de 1996** sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, elaborando un informe técnico que deberá remitirse a los titulares de los tres Poderes del Estado.

i) Ordenar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, elaborar, en el plazo de seis meses, un protocolo de atención a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica para su aplicación en todas las oficinas consulares brasileñas en el exterior, tomando como referencia el proyecto piloto desarrollado por el Consulado General de Brasil en Roma.

j) Exhortar al Poder Legislativo, en coordinación con el Poder Ejecutivo, a evaluar la necesidad de dictar una legislación específica para regular la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, especialmente en sus aspectos procesales y probatorios.

k) Ordenar a los Tribunales Regionales Federales y a los Tribunales de Justicia de los Estados celebrar acuerdos de cooperación judicial para establecer protocolos coordinados de actuación en los casos de sustracción internacional de niños, incluyendo el intercambio de información sobre procesos de custodia y procedimientos basados en el Convenio de La Haya de 1980, así como la utilización compartida de equipos multidisciplinarios y recursos destinados, en particular, a la producción de pruebas periciales.

l) Declarar que, una vez reconocido que no se encuentran reunidos los requisitos previstos por el Convenio para ordenar el retorno del niño, la competencia para resolver el fondo del litigio, incluida la cuestión de la custodia, corresponderá a los tribunales brasileños del domicilio del progenitor sustractor.

Finalmente, el Tribunal fijó la siguiente **tesis jurídica**:

1. **El Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños es compatible con la Constitución Federal y posee jerarquía suprallegal en el ordenamiento jurídico brasileño**, en razón de su naturaleza de tratado internacional de protección de los derechos del niño.
2. **La aplicación del Convenio en Brasil**, a la luz del principio del interés superior del niño (art. 227 de la Constitución Federal), exige la adopción de medidas estructurales y procesales que garanticen una tramitación rápida y eficaz de los procedimientos de restitución internacional de niños.
3. **La excepción de grave riesgo prevista en el artículo 13(1)(b) del Convenio de La Haya de 1980** debe interpretarse de manera compatible con el principio del interés superior del niño y con una perspectiva de género, de modo que pueda aplicarse cuando existan indicios objetivos y concretos de violencia doméstica, aun cuando el niño no sea la víctima directa.

Todo ello conforme al voto del **Ministro Luís Roberto Barroso**, Presidente y Relator. El **Ministro Dias Toffoli** formuló una disidencia parcial en la **ADI 7.686**, por considerar que la demanda debía ser íntegramente acogida.

Pleno del Supremo Tribunal Federal, 27 de agosto de 2025.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 4.245 e, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 7.686, para: a) Conferir interpretação conforme ao art. 13(1)(b) da Convenção da Haia de 1980, para reconhecer que a exceção ao retorno imediato da criança por risco grave à sua integridade física, psíquica ou situação intolerável aplica-se nos casos de violência doméstica, ainda que a criança não seja vítima direta, desde que demonstrados indícios objetivos e concretos da situação de risco, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF/1988) e da perspectiva de gênero (arts. 1º, III, e 226, § 8º, CF/1988); b) Determinar ao Conselho Nacional de Justiça a constituição de grupo de trabalho interinstitucional para elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, proposta de resolução voltada a atribuir maior celeridade e eficiência na tramitação dos processos de restituição internacional de crianças, assegurando, mediante contraditório e ampla defesa, que a decisão final sobre o retorno da criança seja tomada em prazo não superior a 1 (um) ano; c) A resolução, que fará a adequação da Resolução CNJ nº 449/2022 aos termos desta decisão, estabelecerá o dever da parte requerida de informar a existência de eventual ação judicial de guarda da criança em curso no território nacional e atribuirá ao Fórum Nacional da Infância e da Juventude (Foninj) do CNJ a gestão da tramitação dessas ações no país. A exigência de contraditório e ampla defesa aplica-se tanto nas hipóteses do art. 1, como do art. 12 da Convenção. Também servirão como elementos de convicção os fatos públicos e notórios e as regras de experiência (CPC, arts. 374 e 375); d) Determinar aos Tribunais Regionais Federais que editem atos normativos para promover a concentração da competência para processar e julgar ações relacionadas à Convenção da Haia de 1980, no que diz respeito aos processos de restituição, em uma ou mais varas da capital e turmas julgadoras, com fundamento no art. 96, I, "d", CF/1988, visando à uniformidade e à celeridade processual; e) Determinar a instituição de núcleos de apoio especializado, no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, para incentivar a conciliação, a adoção de práticas e metodologias restaurativas, qualificar e coordenar a realização de perícias psicossociais, e atuar como instância de apoio técnico e metodológico aos magistrados; f) Determinar que os órgãos do Poder Judiciário, com o apoio do CNJ, ajustem os sistemas de processo eletrônico para viabilizar a inclusão de selos (tag) de tramitação preferencial para todos os processos que recebam código de assunto "10921 Restituição de Criança, Convenção da Haia 1980", conforme estabelecido no art. 27 da Resolução CNJ nº 449/2022; g) Determinar ao Poder Executivo a adoção de medidas estruturais e administrativas para fortalecer a atuação da Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF), com a definição de metas, cronograma e indicadores de desempenho; h)

Determinar ao Poder Executivo que avalie a conveniência da adesão do Brasil à Convenção da Haia de 1996 (sobre jurisdição, lei aplicável, reconhecimento, execução e cooperação em matéria de responsabilidade parental e medidas de proteção das crianças), com elaboração de relatório técnico a ser encaminhado aos chefes dos três Poderes; i) Determinar ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, que elabore, no prazo de até seis meses, protocolo de atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, a ser adotado em todas as unidades consulares do Brasil no exterior, tomando como referência o projeto-piloto desenvolvido pelo Consulado-Geral do Brasil em Roma; j) Apelar ao Poder Legislativo para que, em interlocução com o Poder Executivo, avalie a necessidade de legislação específica para regulamentar a Convenção da Haia de 1980, em especial no que concerne aos aspectos processuais e probatórios de sua aplicação; k) Determinar que os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça celebrem acordos de cooperação judiciária para estabelecer protocolos de atuação coordenada em casos de subtração internacional de crianças, contemplando, entre outras medidas, o compartilhamento de informações relativas a ações de guarda e ações fundadas na Convenção da Haia de 1980 e a utilização compartilhada de estruturas e equipes multidisciplinares, especialmente para a produção de perícias; l) Uma vez reconhecido não estarem reunidas as condições previstas na Convenção para a determinação do retorno, fica firmada a competência da Justiça brasileira, do foro do domicílio do genitor(a) subtrator(a), para decidir as questões de fundo envolvidas no caso, inclusive a guarda do menor. Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: "1. A Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis da subtração internacional de crianças é compatível com a Constituição Federal, possuindo status supralegal no ordenamento jurídico brasileiro, por sua natureza de tratado internacional de proteção de direitos da criança. 2. A aplicação da Convenção no Brasil, à luz do princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF), exige a adoção de medidas estruturais e procedimentais para garantir a tramitação célere e eficaz das ações sobre restituição internacional de crianças. 3. A exceção de risco grave à criança, prevista no art. 13 (1) (b) da Convenção da Haia de 1980, deve ser interpretada de forma compatível com o princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF) e com perspectiva de gênero, de modo a admitir sua aplicação quando houver indícios objetivos e concretos de violência doméstica, ainda que a criança não seja vítima direta". Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator). O Ministro Dias Toffoli restou parcialmente vencido na ADI 7.686, pois julgava integralmente procedente a ação. Plenário, 27.8.2025.

Decision:

The Court, unanimously, partially granted the request made in ADI 4,245 and, by majority, partially granted the request made in ADI 7,686, in order to:

a) Provide an interpretation in conformity with Article 13(1)(b) of the 1980 Hague Convention to recognize that the exception to the immediate return of a child on account of a grave risk to his or her physical or psychological integrity, or of an intolerable situation, applies in cases of domestic violence, even if the child is not a direct victim, provided that there are objective and concrete indications of the risk situation, in line with the principle of the best interests of the child (Art. 227, Federal Constitution/1988) and the gender perspective (Arts. 1(III) and 226 §8, Federal Constitution/1988);

b) Order the National Council of Justice (CNJ) to establish an inter-institutional working group to prepare, within 60 (sixty) days, a draft resolution aimed at ensuring greater speed and efficiency in the processing of international child return proceedings, guaranteeing, with full adversarial proceedings and ample defense, that the final decision on the return of the child is issued within no more than one (1) year;

c) Determine that the resolution, which shall adjust CNJ Resolution No. 449/2022 to the terms of this decision, shall establish the obligation of the respondent to disclose the existence of any pending child custody proceedings in the national territory, and shall assign to the CNJ's National Forum on Children and Youth (Foninj) the management of the processing of such cases in Brazil. The requirements of adversarial proceedings and ample defense apply both to situations under Art. 1 and Art. 12 of the Convention. Public and notorious facts, as well as rules of experience (CPC, Arts. 374 and 375), shall also serve as elements of conviction;

d) Order the Federal Regional Courts to issue normative acts to promote the concentration of jurisdiction for hearing and adjudicating cases related to the 1980 Hague Convention, with regard to return proceedings, in one or more trial courts and appellate panels located in the state capitals, pursuant to Art. 96, I, "d", of the Federal Constitution/1988, with a view to procedural uniformity and celerity;

e) Order the creation of specialized support centers within the Federal Regional Courts to encourage conciliation, the adoption of restorative practices and methodologies, the qualification and coordination of psychosocial expert examinations, and to act as technical and methodological support for judges;

f) Order the bodies of the Judiciary, with the support of the CNJ, to adapt electronic case management systems to enable the inclusion of preferential-processing labels (tags) for all cases with the subject code "10921 Child Return, Hague Convention 1980," as provided in Art. 27 of CNJ Resolution No. 449/2022;

g) Order the Executive Branch to adopt structural and administrative measures to strengthen the performance of the Federal Central Authority (ACAF), defining goals, timelines, and performance indicators;

h) Order the Executive Branch to assess the advisability of Brazil's accession to the 1996 Hague Convention (on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement, and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children), with the preparation of a technical report to be submitted to the heads of the three Branches of Government;

i) Order the Executive Branch, through the Ministry of Foreign Affairs, to prepare, within six months, a protocol for assisting women and children victims of domestic violence, to be adopted in all Brazilian consular posts abroad, taking as a reference the pilot project developed by the Consulate-General of Brazil in Rome;

j) Appeal to the Legislative Branch to, in coordination with the Executive Branch, assess the need for specific legislation to regulate the 1980 Hague Convention, particularly with respect to the procedural and evidentiary aspects of its application;

k) Order the Federal Regional Courts and the State Courts of Justice to enter into judicial cooperation agreements to establish coordinated protocols for handling cases of international child abduction, including, among other measures, the sharing of information regarding custody proceedings and proceedings based on the 1980 Hague Convention, as well as the joint use of structures and multidisciplinary teams, particularly for the production of expert reports;

l) Once it has been recognized that the conditions set forth in the Convention for ordering the return are not met, jurisdiction shall rest with the Brazilian courts, at the forum of the domicile of the abducting parent, to decide on the merits of the case, including the custody of the minor.

Finally, the following thesis of judgment was established:

"1. The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is compatible with the Federal Constitution and has supralegal status within the Brazilian legal order, due to its nature as an international treaty for the protection of children's rights.

2. The application of the Convention in Brazil, in light of the principle of the best interests of the child (Art. 227, Federal Constitution), requires the adoption of structural and procedural measures to ensure the swift and effective processing of cases concerning the international return of children.

3. The grave risk exception to the return of a child, provided in Art. 13(1)(b) of the 1980 Hague Convention, must be interpreted in a manner compatible with the principle of the best interests of the child (Art. 227, Federal Constitution) and with a gender perspective, so as to allow its application where there are objective and concrete indications of domestic violence, even if the child is not a direct victim."

All in accordance with the opinion of Justice Luís Roberto Barroso (President and Rapporteur). Justice Dias Toffoli was partially dissenting in ADI 7,686, as he considered the action to be fully granted.

Plenary, August 27, 2025.